



JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D.C.
-SECCIÓN TERCERA-

Página 1

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

Naturaleza del asunto: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación : 11001-33-43-060-2017-00180-00
Demandante : NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado : MUNICIPIO DE USIACURÍ
Tema : Resuelve recurso de reposición

1. ANTECEDENTES

La parte demandante Nación – Ministerio del Interior interpuso dentro del término recurso de reposición contra la providencia de 13 de julio de 2017, mediante la cual se declaró la falta de competencia por factor territorial para conocer del presente asunto.

2. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Manifiesta la parte demandante que se deben deslindar los objetos contractuales que existen entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Usiacurí; entre éste y los contratistas, que corresponde a los contratos de obra e interventoría.

Que en efecto la relación contractual es la surgida con la suscripción del contrato convenio interadministrativo F-314 de 2013, cuyo objeto es *"aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura mediante la ejecución del proyecto denominado ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC en el Municipio de USIACURÍ (ATLANTICO)"*, contrato que se perfeccionó, se legalizó y se ejecutó en la ciudad de Bogotá D. C.

Otra es la relación contractual muy diferente, correspondiente al desarrollo del proyecto para el *"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA –CIC en el Municipio de USIACURÍ (ATLANTICO)"*, celebrado entre el demandado y los contratistas escogidos mediante los diferentes procesos de selección que adelantó el municipio, tales como el contrato de la obra pública, la interventoría de la misma y los diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana.

Por lo tanto, no se puede mezclar el Convenio Interadministrativo F-314 de 2013, celebrado entre dos entidades de derecho público, el cual persiguió aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para cumplir a cabalidad con los fines del Estado, contrato que se celebró, ejecutó y debe ser liquidado en la ciudad de Bogotá D. C.

De lo anterior, se desprende que la celebración del contrato, ejecución y liquidación del convenio se adelantaría en la ciudad de Bogotá D. C., como efectivamente quedó establecido en el acuerdo de voluntades y en diversos documentos.

En aplicación, del principio de autonomía de la voluntad de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, las partes acordaron para todos los efectos legales y contractuales un domicilio contractual que es la ciudad de Bogotá D. C., situación que no debe desconocer el Despacho, y que de haber guardado silencio las partes respecto del domicilio contractual.



JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D.C.
-SECCIÓN TERCERA-

Página 2

Igualmente, en la cláusula vigésima cuarta del Contrato Interadministrativo F-314 de 2013, se estableció que el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D. C., así mismo las solicitudes de prórroga, como el acta de suspensión o ampliación de la suspensión del contrato, acta de reanudación del contrato o convenio, y otros documentos expedidos en virtud del contrato fueron suscrita en la ciudad de Bogotá D. C.

El operador judicial tendría que dar aplicación a lo establecido en numeral 4 del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que si este comprendiere varios departamentos será el tribunal competente que elija el demandante.

Concluye su escrito citando algunas providencias del Consejo de Estado y controversias admitidas por otras corporaciones judiciales.

En consecuencia solicita se revoque el auto del 13 de julio de 2017, y en su lugar se declare la competencia para conocer de la demanda.

3. CONSIDERACIONES

Procede el Despacho a pronunciarse frente al recurso de reposición interpuesto por la parte demandante Nación – Ministerio del Interior contra la providencia de 13 de julio de 2017, así:

El numeral 4 del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante. (...)"

Teniendo en cuenta lo establecido en la norma, es claro que la competencia territorial en materia contractual se determina por lugar donde se ejecutó o debió ejecutar el contrato y no por el domicilio del mismo como lo manifiesta la parte demandante, por tanto el Despacho confirmará lo decidido en la providencia recurrida.

Ahora bien, en la cláusula primera del Contrato Interadministrativo No. F-314 de 2013, se estableció el objeto del contrato el cual corresponde a *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA en el municipio de USIACURÍ"*

Lo cual indica que el objeto del mencionado contrato no es aunar esfuerzo técnico, administrativos y financieros, sino que comprende la ejecución del proyecto denominado estudio, diseño y construcción del centro de integración ciudadana en el municipio de USIACURÍ.



JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D.C.
-SECCIÓN TERCERA-

Página 3

Por lo tanto, se tiene que la ejecución del contrato se dio en el MUNICIPIO DE USIACURÍ, pues es allí donde se realizó o debió realizar la construcción del centro de integración ciudadana, objeto del Contrato Interadministrativo F-314 de 2013.

Por otra parte, la cláusula segunda del Contrato Interadministrativo No F-314 de 2013, estableció las obligaciones del Municipio, quedando estipulado lo siguiente:

"SEGUNDA: OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO. (...) 4. Adelantar todas las gestiones administrativa, contractuales y financieras necesarias para la contratación de los estudios y diseños, obra e interventorías, ajustados, en todo caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 5. Invertir los aportes recibidos del MINISTERIO –FONSECON única y exclusivamente para adelantar los procesos de selección y contratación de los estudios y diseños, obra e interventorías requeridas para ejecución del objeto del convenio. (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los contratos de obra e interventoría celebrados por el Municipio de USIACURI, corresponden a las obligaciones desplegadas por este, para efectos de ejecutar el objeto del contrato, el cual corresponde a la construcción del centro de integración ciudadana y no como lo manifiesta la parte demandante que la construcción de dicha obra no corresponde al objeto del contrato.

Así las cosas, el Despacho no revocará la providencia recurrida por la demandante, en razón a que es claro que la ejecución del contrato se dio en el municipio de Usiacuri, y que el competente para conocer del presente asunto el Juez Administrativo del Circuito de Barranquilla, por factor territorial, en aplicación del numeral 4 del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto se resuelve;

PRIMERO: No reponer la providencia del 13 de julio de 2017 mediante la cual se declaró la falta de competencia por factor territorial y ordenó la remitir el expediente al Juzgado Administrativos del Circuito de Barranquilla.

SEGUNDO: Por Secretaría de cumplimiento al numeral segundo del Auto del 13 de julio de 2017.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEJANDRO BONILLA ALDANA
Juez